

Participación femenina, representación política y elecciones

Ponente: Dr. Efraín Quiñonez León<sup>1</sup>  
Instituto de Investigaciones Histórico-Sociales  
Universidad Veracruzana

**Ponencia para XXXIII Congreso Internacionaal de Estudios Electorales:  
América Latina y El Caribe, elecciones y virajes políticos**

Mesa VII: Estudios de Género  
11 al 14 de octubre de 2022  
Colima, Colima.

---

<sup>1</sup> Correo-e: [equinones@uv.mx](mailto:equinones@uv.mx); efrain.quinonez.leon@gmail.com

## Participación femenina, representación política y elecciones<sup>2</sup>

### Introducción.

La presente ponencia no tiene otro propósito más que intentar mostrar la manera en que han funcionado hasta hace algún tiempo las desigualdades de género en el terreno de la participación política institucional. Parto de la idea de que la participación política de las mujeres tiene una larga trayectoria histórica, que no se puede circunscribir a los significativos y, desde luego, positivos cambios que han motivado una composición más equitativa en el ámbito de la representación política en el Congreso de la Unión y, también, en prácticamente todas las legislaturas estatales.

Las luchas por la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres se remontan por los menos hasta el siglo XIX. Tampoco se puede negar la participación femenina en acontecimiento históricos importantes para el país (Córdova y González, ).

Sin embargo, este trabajo está más orientado al reconocimiento de lo que se ha avanzado en la paridad de género a propósito de las reformas legales que dieron lugar a la inclusión y a una representación política más genuina de las condiciones de la sociedad mexicana contemporánea. Nos concentramos en el caso veracruzanos porque tienen sus propias particularidades en función del colapso del régimen político hasta hace unos años controlado por el PRI y los cambios en la correlación de las fuerzas políticas locales y la alternancia en el gobierno, particularmente el ascenso de Morena en el gobierno estatal y el control del Congreso.

---

<sup>2</sup> Deseo expresar mi agradecimiento para la Mtra. Carolina Edith Sánchez, por su incondicional apoyo para el presente trabajo. Su ayuda ha sido siempre invaluable sobre todo cuando se trata de ordenar el material estadístico disponible, como en este caso.

Por otra parte, pretendemos destacar la difícil coyuntura para la participación política por las condiciones de inseguridad que imperan en la entidad.

### La equidad ausente

Resulta innegable la presencia de las mujeres en la vida pública del país. Diversos estudios indican que cada vez más se incorporan en algunas áreas del gobierno en sus distintos niveles y también, en el espacio de la representación política, la participación en movimientos sociales diversos y toman un lugar destacado al interior de las instituciones político-partidistas. Nada de esto ha sido gratuito y ha sido principalmente el empuje femenino el que ha sido pieza fundamental para alcanzar no el estado ideal, pero no es menor lo que se ha logrado hasta ahora.

Vale recordar que en los últimos 5 años ha existido un equilibrio en términos de género en el Congreso de la Unión. En la Cámara de diputados, por ejemplo, casi la mitad de ellos son mujeres (48%) y algo similar sucede en la Cámara de senadores.

Aunque en la Administración Pública Federal se han venido dando cambios desde hace algún tiempo, no es menos cierto que ha sido durante la presente administración cuando más mujeres se la incorporado al gobierno federal. Esto es, en casi la mitad de los cargos de relevancia se desempeña una mujer, puesto que de las 19 secretarías de Estado aproximadamente en la mitad de ellas una mujer es la que está al frente.

No obstante, es verdad que cuando se baja la escala de análisis y nos concentramos en los cargos de segundo o tercer nivel, la presencia de las mujeres disminuye e incluso existen dependencias en las que prácticamente la presencia femenina está ausente, como en el caso de la SEDATU y la SEP. Y estos desequilibrios se reproducen a nivel de los ingresos, cuando se compara lo que percibe un hombre en el mismo nivel jerárquico que una mujer, siendo el salario de esta un 26% menor que al de su equivalente masculino.

Aunque el nivel educativo por sí sólo no puede garantizar un desempeño óptimo en el terreno laboral, sin duda alguna es un elemento imprescindible y deseable que los funcionarios cuenten con los grados académicos adecuados y compatible al desempeño de sus funciones. De acuerdo con un estudio del IMCO a propósito de estas disparidades dentro de la administración pública federal, se sabe que las mujeres están más preparadas o tienen grados de escolaridad superiores a los de los hombres y, sin embargo, esto no se corresponde con los cargos en que ellas prestan sus servicios. El 43% de las mujeres tienen una escolaridad a nivel de licenciatura, mientras que esta cifra en hombres alcanza únicamente el 35%, pero esta diferencia es inversamente proporcional en cuanto a la jerarquía de los cargos. Para decirlo con otras palabras, mientras los hombres llegan a tener menor escolaridad, esto no impide que ocupen con mayor frecuencia cargos de mando.

Pese a los obstáculos, en algo se ha podido avanzar y esta inercia de cambios en el plano institucional poco a poco se abre camino a la equidad. Desde luego, esto obedece a la constante insistencia de las mujeres y grupos solidarios, cuyas acciones y luchas emprendidas se ha visto coronadas con la instauración de nuevas reglas enfocadas a subsanar los desequilibrios existentes.

Como resultado de estos cambios legales es que hoy cada vez más mujeres acceden a puestos de jerarquía en los distintos poderes del Estado mexicano, con sus particularidades en cada caso. Por estas razones es que hoy contamos con un Congreso más equilibrado en términos de género y, también, existen 9 mujeres que están a cargo de sus correspondientes poderes ejecutivos estatales: en Aguascalientes (Teresa Jiménez); Baja California (Marina del Pilar); la Ciudad de México (Claudia Sheinbaum); Campeche (Layda Sansores); Chihuahua (María Eugenia Campos); Colima (Indira Vizcaino); Guerrero (Evelyn Salgado); Quintana Roo (Mara Lezama) y en Tlaxcala (Lorena Cuellar). Por un corto tiempo, cabe recordar, estuvo al frente del gobierno de Puebla, Martha Erika Alonso, quien falleciera en un accidente aéreo (Milenio, versión digital consultada el 6 de junio de 2022 <https://www.milenio.com/politica/mujeres-gobernadoras-México-2022-mapa-politico>).

Es verdad que no es la primera vez que llega una mujer a ocupar el cargo de gobernadora, pues existe el antecedente de Griselda Álvarez, en Colima, a quien se reconoce como la primera en ocupar semejante cargo en todo el país. Está, también, Beatriz Paredes, quien llegó a gobernar el Estado de Tlaxcala. Sin embargo, el carácter cada vez más numeroso de mujeres en cargos de jerarquía es una consecuencia de la lucha y los cambios generados en los procesos de democratización del país donde, cabe insistir, ha sido central la participación femenina.

En este sentido, cabe destacar un conjunto de leyes recientemente aprobadas que han estado dirigidas principalmente a evitar la violencia hacia las mujeres y garantizar un entorno institucional que permita la participación política de ellas. En el primer caso, si bien se han hecho esfuerzos por contener la violencia feminicida no podemos sentirnos satisfechos con lo hasta ahora alcanzado, pues siguen existiendo crímenes de odio en prácticamente todo el país que fundamentalmente afecta a las mujeres. En el segundo, apenas empezamos a observar las consecuencias de las normas aprobadas en el Congreso que obliga a los partidos políticos a garantizar la mitad de candidaturas a las mujeres; por ello es que ahora se presentan candidaturas por parejas del mismo sexo. Esto fue lo que permitió evitar el llamado recurso de las candidatas “juanitas”, quienes simplemente eran usadas por los partidos para formalmente evidenciar “sus cuotas de género”, pero que, al final, simplemente eran desplazadas para que los candidatos hombres accedieran a los cargos.

Por otra parte, la participación del INE y el seguimiento que desde el arbitro electoral se ha dado al cumplimiento de las normas para hacer realidad la equidad de género ha sido central, no solamente para que los partidos políticos garanticen el derecho de las mujeres a ser candidatas sino que, además, para que esto se traduzca en una distribución equilibrada entre hombres y mujeres en los cargos de elección popular; por eso es que ahora las candidaturas a las diputaciones se seleccionan por parejas, es decir, los candidatos propietarios y suplentes son del mismo género.

El marco normativo y la equidad de género

En la forma, puede decirse que la aprobación de normas y leyes diversas a fin de garantizar la equidad de género tiene antecedentes históricos tan remotos, como el derecho al sufragio para las mujeres otorgado en los años 50 del siglo pasado. Desde luego, este hecho se constituyó en uno de los primeros y fundamentales avances para la participación política de las mujeres, pues empezaron a ejercer sus derechos políticos en 1955 mientras transcurría el gobierno de Ruiz Cortines. Sin embargo, ni los procesos de democratización de los años 60, como tampoco la reforma política de 1977 y la alternancia en el año 2000, hicieron mucho más por reconocer el derecho no solamente al sufragio sino, además, a la representación política a través de candidaturas femeninas. Así, el acceso a los cargos de elección popular, como al resto de los poderes de la unión, estaban casi garantizados para los hombres en perjuicio de las mujeres.

Con la movilización social y la exigencia de promover mecanismos que eviten la discriminación es que se ha podido que más mujeres ingresen al desempeño de cargos públicos. Para ello no solamente ha sido necesario el reconocimiento de las contribuciones que ellas hacen a diario en las distintas actividades en las que se desempeñan, sino que ha sido fundamental que esta ola por los derechos de las mujeres se traduzca en leyes y ordenamientos que permitan una mayor equidad entre los géneros.

Uno de los primeros ordenamientos para garantizar un mayor equilibrio entre hombres y mujeres se aprobó a finales del sexenio de Vicente Fox. En efecto, la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el 2 de agosto de 2006 y en ella hay un conjunto de reglas dirigidas a garantizar y equilibrar las oportunidades entre los géneros.

Más allá de las emanaciones centralistas que se desprenden de la ley, sin duda constituye un avance porque, en principio, se reconoce la desigualdad de oportunidades existente, se ofrece la posibilidad de instaurar una política de observancia general y desde la perspectiva de género que contribuya a resanar las desigualdades que en este tema se presentan en el país.

Esta ley también obliga a los gobiernos en sus distintos niveles a adoptar medidas transversales que permitan eliminar las desigualdades y adoptar medidas en lo particular para erradicar los desequilibrios existentes entre los géneros que, como ya vimos, aun se mantienen en el sector público, pues la máxima de “a trabajo igual salario igual” todavía no se aplica plenamente para el caso de las mujeres y, cuando el análisis se dirige a lo que sucede a nivel local, pues desde luego que las diferencias son aun más marcadas.

Ahora bien, esta ley intenta ir más allá de la idea de contar con políticas transversales a fin de eliminar las diferencias de género porque establece criterios que resultan en incentivos para modificar los desequilibrios existentes en los planos económico, político y social. Al mismo tiempo se instauran normas con el propósito de erradicar visiones deformadas basadas en el sexo de las personas.

A nivel económico se plantea, entre otras cosas, el garantizar el acceso al trabajo, mejorar las condiciones del empleo y eliminar las desigualdades en los ingresos. También, se reconoce a la educación como un mecanismo para el ingreso al mercado laboral en mejores condiciones y el fomento de la participación de las mujeres en puestos directivos, por mencionar algunos de los criterios más relevantes.

Por lo que se refiere al ámbito de lo político, la ley está inspirada bajo la lógica de la paridad, como en el caso de la representación política donde directamente se conmina a los partidos a ofrecer espacios de manera igualitaria entre hombres y mujeres. Al mismo tiempo, se propone “la participación paritaria de mujeres y hombres en altos cargos públicos” (pp. 11) y, también, impulsar medidas paritarias de tal manera que en el servicio civil de carrera en todos los poderes de la Unión pueda garantizarse igualdad de oportunidades para la selección, contratación y ascenso del personal de ambos sexos.

En el plano social, si bien una cuestión fundamental es la difusión y el conocimiento de la ley, se trata de garantizar derechos sociales (educación, salud, alimentación) en un plano de igualdad no solamente para las propias mujeres y hombres, sino incluso para sus dependientes económicos. En este aspecto, la ley deja ver su sentido más ambicioso, puesto

que estipula en su artículo 37 que se trata de “modificar los patrones socioculturales de conducta de hombres y mujeres con miras a alcanzar la eliminación de los prejuicios y las prácticas consuetudinarias y de cualquier otra índole que estén basados en la idea de inferioridad o superioridad de cualquiera de los sexos...” (pp. 11-12).

Por otra parte, la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales aprobada en 2014 recoge algunos elementos en términos de equidad de género, justamente para incidir en una distribución de cargos de representación política basados en criterios de igualdad sustantiva que, de acuerdo con la Ley para la Igualdad entre Hombres y Mujeres, significa “el acceso al mismo trato y oportunidades para el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos humanos y las libertades fundamentales” (pp. 2).

De hecho, en la Ley General de Instituciones y Procedimiento Electorales, se estipula en el artículo 3ero. que la igualdad política entre hombres y mujeres “se garantiza con la asignación del 50% mujeres y 50% hombres en candidaturas a cargos de elección popular y en nombramientos de cargos por designación...” (pp. 2). Al mismo tiempo, el artículo 7 pone énfasis en la obligación que tienen los partidos políticos para hacer efectivo el derecho a “la igualdad de oportunidades y la paridad entre hombres y mujeres para tener acceso a cargos de elección popular” (pp. 4).

Por su parte, la Ley General de Partidos Políticos reitera la necesidad de incentivar “los valores cívicos y la cultura democrática, la igualdad sustantiva entre niñas, niños y adolescentes, y garantizarán la participación paritaria en la integración de sus órganos, así como en la postulación de candidaturas”. Al mismo tiempo, este ordenamiento niega categóricamente que los partidos políticos puedan aplicar criterios diferenciados para la asignación de candidaturas en perjuicio de alguno de los géneros; por tal motivo resulta inadmisibles otorgar candidaturas en aquellos distritos en que “el partido haya obtenido los porcentajes de votación más bajos en el proceso electoral anterior” (pp. 3).

Desde luego, existe un catálogo mucho más amplio de reglamentaciones que intentan promover ciertos derechos de las mujeres y/o limitar las condiciones de inequidad, violencia



o discriminación. Para los propósitos del presente trabajo, únicamente tratamos de recuperar algunos de los ordenamientos jurídicos para entender el entramado legal sobre el cual se asientan las mayores posibilidades a la representación política que hoy tienen las mujeres. En este sentido, admitimos que nuestra incursión en la revisión de las leyes mencionadas no es exhaustiva sino selectiva, con el fin de ilustrar cómo es que a través de estos ordenamientos puede explicarse o entenderse mejor la actual composición equilibrada tanto del Congreso de la Unión, como de las diferentes legislaturas estatales.

La participación femenina en elecciones locales y el Congreso veracruzano

Como hemos visto, las leyes que implican una mayor equidad sobre todo en términos de la representación política y la obligación de los partidos políticos a proceder en consecuencia implantando cuotas de género, básicamente se remontan a las reformas a diversos ordenamientos jurídicos ocurridos apenas en 2014. Sin lugar a dudas la presión política ejercida para motivar los cambios y la adecuación de la norma jurídica han incidido en que el panorama ahora resulte más equitativo y, por lo tanto, más democrático y menos discriminatorio a como estaba antes.

Después de estas reformas, en Veracruz se han llevado a cabo tres procesos electorales, pero las modificaciones que mandatan las reformas a las leyes por la equidad de género no se dejaron sentir sino hasta algunos años después. En efecto, en las elecciones locales de 2015 apenas fueron electas como diputadas 5 de mayoría relativa y 4 más que ingresaron al Congreso veracruzano como diputadas plurinominales. Conviene recordar que el Congreso veracruzano se integra con 30 diputados de mayoría y 20 de representación proporcional. Esto significa que existía una sobrerrepresentación masculina en esa legislatura, pues del total de diputados 9 eran mujeres y los 41 restantes hombres. En otras palabras, las diputadas apenas representaban el 18% del total, mientras que 82% eran diputados hombres. Es obvio el escandaloso desequilibrio que esto significa en la representación política frente a un sector de la ciudadanía que está por encima del 50% de la población total de la entidad.

En esta elección las únicas diputadas que ganaron en sus distritos por la vía de los votos directos de los ciudadanos fueron: Mónica Robles Barajas, quien ganó por mayoría en el

distrito de Coatzacoalcos I por el Partido Verde; Marcela Aguilera Landeta, ganó en el distrito de Tierra Blanca por el PRI; Gladys Merlín Castro, también por el PRI obtuvo la victoria en el distrito de Cosoleacaque; en el distrito de Tuxpan resultó ganadora por el PRI, Gabriela Arango Gibb; también por el PRI, Octavia Ortega Arteaga, obtuvo el triunfo en el distrito de Pánuco. El resto de las diputadas llegaron al Congreso por la vía plurinominal: Jaqueline García Hernández, de Nueva Alianza; Ana María Condado Escamilla, por el PRD; María del Carmen Pontón Vill y Ana Cristina Ledezma López, por el PAN.

No olvidemos que en estos momentos nos encontramos en la fase final de la administración de Javier Duarte, cuando ya eran imparables los escándalos por corrupción en el gobierno en donde el jefe del ejecutivo estatal era uno de los principales protagonistas. Si Fidel Herrera destruyó la poca institucionalidad que existía en Veracruz, su sucesor escaló “la política de rapiña y el uso faccioso de los recursos públicos”. Como ha sido profusamente difundido en la prensa, Duarte dispuso de los recursos públicos como si fuese patrimonio propio y usándolos para favorecer a red de cómplices que logró crear durante su mandato. Bajo esa lógica, atender las necesidades de la gente y pagar a proveedores fueron medidas relegadas a un segundo plano y eso es lo que explica la crisis de confianza y el hartazgo de la ciudadanía que se vio reflejado en el colapso electoral del PRI que sobrevendría en los siguientes años (Quiñonez, 2021).

Este panorama de sobrerrepresentación cambió radicalmente en las elecciones de 2018, pues pasamos de los desequilibrios antes mencionados a una suerte de representación política equitativa en la composición del Congreso veracruzano, ya que del total de posiciones la mitad correspondió a mujeres (25) y la otra a hombres (25).

De los 30 distritos de mayoría, la alianza de los partidos Morena, PT y Encuentro Social se llevaron el triunfo en 21 de ellos. De este total, en 9 de estos las candidatas de Morena, PT y Encuentro Social se llevaron el triunfo. La candidata que mayor número de sufragios tuvo fue, Magaly Armenta Ontiveros, que compitió por el distrito de Cosoleacaque obteniendo poco menos de 80 mil sufragios (79,084). Por el contrario, la candidata que compitió por esta

alianza y menos votos tuvo fue María Esther López Callejas, pero a pesar de ello logró ganar su distrito.

Como se deduce de lo anterior, la oposición únicamente pudo ganar en 8 distritos por la vía del voto directo de los ciudadanos. En efecto, la alianza integrada por PAN, PRD y MC, solamente pudo obtener la victoria en los distritos de Tantoyuca, Álamo, Camerino Z. Mendoza, Veracruz y Veracruz II, Boca del Río, Huatusco y Zongolica. Del total de distritos ganados por la oposición, el 5 de ellos fueron mujeres las candidatas.

El mismo equilibrio se mantuvo en la distribución por género con relación a las diputaciones de representación proporcional, es decir, por ese principio se incorporaron 10 mujeres y la misma cantidad de hombres.

En las elecciones intermedias de 2021, sobrevino la debacle del PRI, ya bastante diezmado en las elecciones previas, únicamente pudo mantener las tres posiciones que tenía anteriormente, pero por la vía plurinominal, pues no ganó ningún distrito de mayoría. En general, la oposición quedó prácticamente borrada del mapa electoral veracruzano, pues los únicos partidos que realmente le compitieron a Morena fueron el PAN que ganó 4 distritos de mayoría (Misantla, Huatusco, Veracruz II y Boca del Río) y el PT que obtuvo la victoria en el distrito de Zongolica; mientras que el partido en el poder obtuvo el triunfo en los 25 distritos de mayoría restantes.

Si bien en esta elección retrocedieron levemente las mujeres en cuanto triunfos se refiere por la vía de mayoría, pues solamente ganaron en 12 de los 30 distritos; esa diferencia se compensó con las candidatas que se incorporaron por la vía plurinominal (13), de tal forma que se volvió a una representación en un equilibrio perfecto, puesto que accedieron al Congreso de Veracruz 25 mujeres y la misma cantidad de hombres.

Desde luego que alcanzar una representación paritaria ha sido un esfuerzo arduo y notable frente al acendrado machismo que impera en el campo de lo político, pero sin duda este es un elemento importante a destacar en los procesos de democratización del país y esto se

refleja en la diversidad de las agendas e incluso en la aprobación de leyes que, en un escenario distinto, nunca se hubiesen traducido en derechos (Quiñonez, 2022). Nada más tomemos en cuenta el derecho al aborto que, sin estos cambios en cuanto al género en el interior mismo de las organizaciones políticas, la correlación de fuerzas no hubiese sido favorable para su aprobación.

### Oportunidades y retos en un clima de violencia

Aunque la agenda de las diputadas en el Congreso de Veracruz no puede desprenderse del todo de los propios temas y problemas planteados por el movimiento feminista en el país, lo cierto es que lo que particularmente ha resultado ser relevante es, por una parte, las violencias que se presentan en el país como y la necesidad de enfrentar el problema; mientras que, por otra parte, ellas han puesto el acento en aquellas agresiones y entornos inseguros fundamentalmente para las mujeres.

Por otra parte, el tema del aborto, como lo mencionábamos líneas arriba, constituye una bandera de larga data del movimiento feminista y de la cual se han apoderado las diputadas en el Congreso, siendo consecuentes con la necesidad de legislar en torno a una demanda con una larga historia y que hoy día se ve coronada con la reforma que dio lugar a la legalización del aborto antes de las 12 semanas de gestación, aprobada en la legislatura local apenas el 20 de julio del año pasado.

Si bien estos elementos constituyen un avance importante para la vida democrática de Veracruz, lo cierto es que una mayor participación de la mujer en la vida política y, sobre todo, un mayor equilibrio en el acceso a cargos de representación en el Congreso, ocurre en un contexto de violencia que no es necesariamente el mejor escenario para el desempeño de la actividad política.

En lo que va del gobierno actual, la administración estatal no solamente ha tenido que enfrentar el problema de la escasez de recursos producto del mal manejo del presupuesto público de los gobiernos previos, sino que también tiene el reto de combatir los altos niveles

de violencia que se viven en ciertas zonas de la entidad. Peor aun, a los pocos meses de la administración de Cuitláhuac García, se suscitaron hechos violentos que derivaron en sendas matanzas en las ciudades petroleras de Minatitlán y Coatzacoalcos, al sur del Estado de Veracruz.

Un breve resumen del estado de violencia que se vive cotidianamente en la entidad nos indica que, en cuanto homicidios, en 2018 se cometieron 2439, en 2019 se nota un descenso de poco menos de 50 casos al contabilizarse 2393 asesinatos, en 2020 se contabilizaron 2178 y en 2021 fueron 2063. Como nos muestran las cifras, ha venido descendiendo el número de homicidios durante esta administración, pero no se alcanzan todavía los niveles que se tenían en los años previos donde el número de homicidios era inferior a los 2000 asesinatos al año.

Otros delitos que han mostrado un comportamiento a la baja son el acoso sexual y los feminicidios. En el primer caso, durante 2018 se denunciaron un total de 174 casos por acoso y en 2020 únicamente 16. Cabe destacar que no se registraron denuncias por este delito ni en 2019, como tampoco en 2021. Por otra parte, los feminicidios se denunciaron 350 durante el periodo 2018-2021, pero la cifra ha venido disminuyendo desde 2018 cuando se contabilizaron 101, mientras que en 2021 únicamente se registraron 69.

Sin embargo, los delitos de violencia familiar, abuso sexual y violación simple muestran una tendencia de crecimiento durante el periodo 2018-2021. En este último delito, por ejemplo, se reportan 1579 durante esos tres años, pero se pasó de 312 en 2018 a 475 en 2021. Por su parte, el abuso sexual tiene un crecimiento todavía más espectacular al pasar de 211 denuncias en 2018 a más de 800 casos (879) en 2021. De la misma forma, la violencia familiar crece significativamente, pues se pasa 6219 casos denunciados en 2018 a 11706 en 2021.

Cabe recordar que la mayoría de estos delitos tienen como sus principales víctimas precisamente a las mujeres, niñas y niños.

Se añade a esta situación de por sí crítica, el tema de la violencia política derivada sobre todo de los conflictos poselectorales, por desacuerdos entre los actores políticos o incluso existe la sospecha de la participación de las redes criminales que operan en la entidad. Esto sobre todo ha afectado a funcionarios del orden municipal, aunque ya se ha registrado el asesinato del diputado del PRI, Juan Carlos Molina Palacios, ocurrido a finales de 2019. Entre 2010 y 2019 fueron asesinados 22 funcionario municipales. De todos ellos, en dos casos se trató de homicidios perpetrados en agravio de mujeres que se desempeñaban o habían desempeñado el cargo de alcaldes. Una de ellas, Marisol Cuevas, quien se había sido presidenta municipal de Tlacojalpan por el PAN, en la región de la Cuenca del Papaloapan. La otra era alcaldesa en funciones de Mixtla de Altamirano, Maricela Vallejo, que ganó la presidencia municipal por Morena en el proceso electoral de 2018 (Quiñonez, 2022).

Bajo este panorama, sin duda que los desafíos son enormes, pero o se esperan a que se presenten las mejores condiciones para actuar políticamente o se asumen los retos que significa participar políticamente en un escenario tan adverso como este. A pesar de todo, es posible impulsar una agenda que permita instaurar nuevos derechos o hacer efectivos aquellos que han sido relegados durante mucho tiempo.

#### Comentarios finales

La composición plural y equitativa en el Congreso no solamente obedece a los cambios en la ley, aunque desde luego esa materia ha sido muy importante para alcanzar una representación política más equilibrada. Previamente, las reformas estuvieran acompañadas de la movilización social y la insistencia de ciertos actores políticos en favor de la igualdad de oportunidades.

Como hemos visto, el equilibrio entre los sexos en el tema de la representación política, al menos en el Congreso veracruzano, solamente se alcanzó hasta las elecciones de 2018 y esto no solamente fue motivado por los cambios que ya se venían dando a nivel de la movilización social, la voluntad expresa de los actores político y los cambios legislativos dirigidos a romper el monopolio de la representación de uno de los sexos en perjuicio del otro. Debe

apuntarse, también, la descomposición de la oposición o su desgaste frente a la insatisfacción de las demandas planteadas desde la ciudadanía, ligado al descrédito de sus liderazgos más visibles, así como el fracaso de las políticas emprendidas y los escándalos de corrupción de quienes tenían la responsabilidad de combatirla.

Al mismo tiempo, el arrastre de la candidatura del hoy presidente de la república y la voluntad expresa de subsanar los agravios a la población a través de las demandas insatisfechas y las ostensibles muestras de fraudes y desfalcos al patrimonio nacional, ofrecieron la posibilidad de un cambio que la población terminó por favorecer masivamente en las elecciones de 2018. La narrativa del fracaso de las políticas neoliberales en el mundo y particularmente en México calificada como un saqueo a los bienes del país, fue el discurso que conectó hondo en el ciudadano común que, finalmente, decidió llevar al poder a quien se oponía a tales comportamientos y ofrecía en campaña acabar con la corrupción.

En el caso particular de Veracruz, la ciudadanía venía experimentando gobiernos cada vez más cuestionados por las sospechas de corrupción y la falta de controles institucionales que moderaran los impulsos de los funcionarios. Al menos desde los gobiernos de Miguel Alemán, pero sobre todo los de Fidel Herrera y Javier Duarte, la clase política priísta veracruzana evidenció cada vez más su descomposición interna, su propensión al manejo irresponsable y hasta ilegal de los recursos públicos, el envilecimiento de la escasa institucionalidad existente a través de la corrupción sistémica, fueron provocando un descontento creciente en la población que finalmente se expresó de manera contundente en las elecciones de 2018 y subsecuentes, dejando al PRI fuera del poder y su más mínima expresión en el Congreso.

Esta descomposición de la clase política priísta veracruzana abrió espacios de participación y motivó una cierta circulación de élites que, a su vez, permitió que se incorporaran otros liderazgos a cargos políticos de relevancia. De esta forma, se fueron incorporando cada vez más mujeres a puestos de elección popular tanto en alcaldías, como en la Legislatura estatal, como hemos pretendido mostrar en el presente trabajo.

## Referencias

AVC. 2020. Van 8 alcaldes y alcaldesas de Veracruz asesinados en los últimos años. 5 de agosto. Veracruz. México.

Avendaño, Fernanda; Cortés, Paulina; et. Al. 2021. Mujeres en la Administración Pública Federal: más allá de la foto. México: IMCO.

Bonifaz Alfonzo, Leticia. S/F. El principio de paridad en las elecciones: aplicación, resultados y retos. Suprema Corte de Justicia de la Nación. México.

Diario Oficial de la Federación. 2020.

La Jornada. 2021. “Alto nivel de violencia política” en elecciones mexicanas: ONU-DH. Versión digital consultada el 3 de agosto de 2022.

Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres. 2006. Cámara de Diputados del Congreso de la Unión. México.

Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. 2014. Cámara de Diputados del Congreso de la Unión. México.

Ley General de Partidos Políticos. 2014. Cámara de Diputados del Congreso de la Unión. México.

Lindor, Moïse. 2022. Integridad electoral, género y violencia política durante las elecciones de 2021 en México. En Revista Mexicana de Estudios Electorales, Vol. 6, número 28, julio-diciembre, pp. 143-182.



Milenio, versión digital consultada el 6 de junio de 2022  
<https://www.milenio.com/politica/mujeres-gobernadoras-México-2022-mapa-politico>

S/A (sin autor).

Quiñonez, Efraín. 2022. La violencia política hacia las mujeres y el discurso parlamentario: el caso veracruzano. En Cárdenas, Georgina, Barrera, Dalia y Magdalena Sam (Coords). Violencia política en razón de género: experiencias regionales en México. México. UNAM.

Ravel, Dania. 2022. El nuevo reto para la paridad en las gubernaturas. En *El Herald de México*. México.

Toche, Nelly. 2021. El proceso electoral de 2021, el más violento hacia las mujeres, 21 candidatas asesinadas. En *El Economista*. México.